

FECHA:	16/06/2013 09:30:34 AM
OBJETO:	DE DEMANDA DE REPOSICION
CONTROL:	CONTENCIOSO
ACTUACION:	REPOSICION DEL DERECHO DE REPOSICION
ALFABETO:	NO HABLA
INTELECCION:	NO

Procede el despacho a recibir el recurso de reposición, interpuesto por el actor en la parte demandada, contra el auto del 20 de junio de 2013 por el cual se declaró la falta de jurisdicción y competencia para conocer del medio de control de la referencia, y se ordenó remitir a los Juzgados Civiles del Circuito de Medellín.

**ANTECEDENTES**

Recibida por reparto la presente demanda, fue admitida mediante auto del 06 de junio de 2013, con el fin de que la parte actora subsane las faltencias pleneamente formuladas por el Despacho, dentro de los días 14, 15 y 16 de junio de 2013.

2. De conformidad con el numeral 4º del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011, el actor allegó pruebas a la instancia y fundamentó su demanda de reposición.

En escrito presentado ante la Oficina de Apoyo de los Juzgados Administrativos del Circuito de Medellín (folios 177 a 178), fue allegado el citado certificado, y con fundamento en el precepto el despacho a declarar la falta de jurisdicción y competencia, dado que la entidad es de carácter privado, y en consecuencia, son los jueces Civiles del Circuito de Medellín, los competentes para conocer del hecho.

No conforme con la decisión, el actor interpuso recurso de reposición en contra de la providencia en comento y solicitó al Despacho revocar la decisión y anular el conocimiento de la demanda.

**CONSIDERACIONES**

El artículo 242 de la Ley 1437 de 2011, dispone:

“Art. 242. Reposición. Es una norma legal en contrario, el recurso de reposición procede contra los autos que no sean susceptibles de apelación o de casación.

En cuanto a su oportunidad y forma se aplican el dispuesto en el Código de Procedimiento Civil.”

A su turno, el inciso 3º del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, establece:

“El recurso deberá interponerse con expresión de las razones que lo sustentan, por escrito presentado dentro de los tres días siguientes al de la notificación del auto, excepto cuando éste se haya dictado en una audiencia pública, caso en el cual deberá interponerse en forma verbalmente en la audiencia pública.”

El recurso de reposición dentro del trámite procesal, responde a la facultad que tienen los jueces de solicitar al Juez que resolvió el asunto apelado a su conocimiento, a fin de que revoque o reforme la decisión adoptada, ante la eventual existencia de un error por parte del funcionario.

Solicita el Despacho la parte demandada revocar la decisión, y anular conocimiento del presente medio de control con fundamento en los numerales 1º y 2º de artículo 104 de la Ley 1437 de 2011, y su parágrafo, al considerar que este Juzgado tiene jurisdicción y competencia para emitir sentencias administrativas en contra de la Nueva EPS por la cual se declaró el medio de control de reposición directa y en los cuales se encuentran en juego intereses públicos que son esenciales para el ordenamiento jurídico.

Sea lo primero advertido que de conformidad con el certificado de existencia y representación legal, la Nueva EPS es una sociedad anónima constituida mediante escritura pública No. 753 del 22 de marzo de 2007, autorizada para operar como Entidad Promotora de Salud del régimen contributivo a través de la Resolución No. 271 del 3 de abril de 2008 de la Superintendencia Nacional de Salud. Así mismo se desprende de tales documentos que con posterioridad a esta autorización, la Financiera Vía Vía (Financiera), se unió como accionista de la sociedad, suscribiendo acciones equivalentes al 50% menos una acción de capital sujeta por la sociedad.

Además, el recurrente, hace como argumento de su inconstitucionalidad, lo dispuesto en algunas de las sentencias de la Corte Constitucional, que hablan acerca de la

naturaleza jurídica de la Nueva EPS, y donde se concluye que es una sociedad de economía mixta. En embargo, este despacho se aparta de tales consideraciones con base en lo siguiente:

Aun antes de la vigencia de la Constitución de 1991 se le había dado cabida en el ordenamiento jurídico, a la denominada descentralización por servicios, en cuyo caso se le otorga a entidades públicas en territorios algunas funciones que las permiten ejercer, autónomamente, una actividad especializada, bajo el grado de identificación requerido por el ejercicio de estas competencias y aun la conveniencia de que sean ejercidas en conjunto con los particulares.

Dentro de las entidades descentralizadas por servicios, tradicionalmente fueron clasificadas las entidades públicas, así como las empresas industriales y comerciales del Estado y las sociedades de economía mixta. Esa nomenclatura subsistió para la Constitución Política, en el numeral 7º del artículo 189, facultó al Congreso de la República para “crear o autorizar la constitución de empresas industriales y comerciales del Estado y sociedades de economía mixta”.

De conformidad con el artículo 192, ya citado, en concordancia con el artículo 270 además, “los entes del orden nacional descentralizados por servicios solo pueden ser creados por ley o por autorización de esta, con fundamento en las funciones que compete a la entidad administradora”, lo que desde luego, resulta aplicable a las sociedades de economía mixta, regimemente definidas en el artículo 8º de la Ley 488 de 1998 como organismos autorizados por la ley, constituido bajo la forma de sociedades comerciales con acciones emitidas y de carácter privado que desarrollen actividades de naturaleza industrial o comercial conforme a las reglas del derecho privado, salvo las excepciones que consagra la ley.”

Agregado el artículo anteriormente citado que para la calificación de una sociedad comercial como de economía mixta era necesario que “la acción estatal o la del Estado, de entes territoriales de entes descentralizados y de empresas industriales o comerciales del Estado o sociedades de economía mixta” no haya relevado el inmueble por el cual (EPS) del cual el capital social efectivamente suscito y pagado?”

En embargo, esta parte de la definición fue declarada inaplicable por la Corte Constitucional en la sentencia C-525 de 1998, así como que el artículo 189 numeral 7º, 300 numeral 7º y 313 numeral 8º confieren competencia, en su orden,

al Congreso, las Asambleas y los Concejos para crear o autorizar la constitución de sociedades de economía mixta, “en el que se hubieren señalado proporciones mínimas de participación de los entes estatales en la composición del capital de tales sociedades”, lo cual significa que una sociedad de economía mixta tan solo requiere que haya de la voluntad del legislador, “se trata de una pertenencia a la Nación, y por así decirlo una ordenanza departamental o un acuerdo municipal, lo que hace a las entidades territoriales” que a cambio de nada surge de que “su capital social se forme por aportes del Estado y de los particulares, característica que determina su gestión con régimen jurídico que le permite acceder al insumo general que se produce por el Estado o por las entidades territoriales, con la especulación económica que en las actividades mercantiles, se produce por los particulares.”

Así mismo, el artículo 8º de la Ley 488 de 1998, dispone que en el caso de constitución de una sociedad de economía mixta se refieren las condiciones para la participación del Estado que consagra la disposición que autoriza su creación, en ciertos sectores, departamental, distrital o municipal de la sociedad, del otro se involucran los demás organismos para después del control que ha de ejercerse sobre ella.

De lo anterior, es preciso concluir que si el legislador es quien determina la creación de una sociedad de economía mixta o autoriza su constitución mediante ley (la sociedad de economía mixta se debe constituir como sociedad comercial) ni el momento de su constitución, ni mediante aportes de capital por parte de una entidad estatal y personas de diverso carácter, ni en el acto de constitución, se imponen las condiciones para la participación del estado y la disposición que autoriza su creación, ni el modo autoriza del Gobierno Nacional cuando se trata de aquellas sociedades de economía mixta creadas por el orden nacional.

Así las cosas, ante el despacho se tiene que la Nueva EPS, es una sociedad comercial de naturaleza anónima y de carácter privado, creada mediante escritura pública No. 753 de 2007, no es una sociedad de economía mixta, pues no fue creada por la ley, y mucho menos constituida por autorización legal.

Así como se dijo en el auto del 20 de junio de 2013, los términos del numeral 1º del artículo 104 de la Ley 1437 de 2011, para que la Jurisdicción de la Contaduría Administrativa conozca de las controversias y litigios que se originan

por omisión superior al derecho administrativo, debe estar involucrada una entidad pública, pues de lo contrario se trata meramente de un asunto de responsabilidad médica, según la relevancia de que trata el artículo 822 del Código General del Proceso, por referirse a controversias relativas a la prestación de servicios médicos y a la responsabilidad social, que se resuelve entre el paciente, beneficiario o usuario y las entidades administradoras o prestadoras, cuyo conocimiento corresponde a la Jurisdicción Ordinaria en la especialidad Civil.

Por las consideraciones a juicio de este Despacho, la decisión contenida en el auto del 20 de junio de 2013, le deja el derecho, por lo que se materializó no tiene el despacho en dicho providencia.

En merito de lo expuesto, el JUZGADO VIENTE ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLIN,

**RESUELVE**

**PRIMERO:** No repone el despacho en el auto del 20 de junio de 2013, por las razones indicadas en la parte motiva.

**SEGUNDO:** Una vez agotado el presente proveído, debe cumplirse a lo dispuesto en el auto del 20 de junio de 2013.

*[Firma]*  
SANDRA LILIANA VARELA HENAO  
JUZG

JUZGADO VIENTE ADMINISTRATIVO ORAL DE MEDELLIN  
CIRCUITO DE MEDELLIN  
CALLE 100 No. 753-300  
MEDALLIN, ANTIOQUIA